



Frontera Sur: Los migrantes, abandonados a su suerte

(Isaín Mandujano, pág. 33 a 35)

Tapachula, Chis.-En medio de la pandemia, miles de migrantes centroamericanos, haitianos, cubanos y africanos quedaron varados en la frontera sur mexicana. Regresar a sus países de origen es imposible para muchos centroamericanos, pues ante la contingencia sanitaria el gobierno de Guatemala selló su frontera. Hacia el norte tampoco pueden avanzar por los retenes policiacos y migratorios; además se exponen al contagio, pues en ese trayecto es mayor el riesgo de contraer coronavirus. El estancamiento causó que miles de migrantes se aglomerasen a primera hora del pasado 27 de abril a las puertas del **Instituto Nacional de Migración (INM)**. Los agentes de la Guardia Nacional intentaban poner orden, pero la multitud de cubanos, haitianos, centroamericanos y africanos no respetó la sana distancia y pocos usaban cubrebocas. Los agentes migratorios les dijeron a los indocumentados que si quieren hacer sus trámites de manera presencial, tienen que esperar después de mayo.

Por ahora el INM sólo los realiza vía electrónica en su plataforma digital. Sin embargo, aun quienes lo hicieron así ya están desesperados porque la respuesta a su petición, que debía llegarles por correo en 20 días hábiles, no aparece todavía. La Estación Migratoria Siglo XXI, construida en el sexenio de Vicente Fox, parece vacía. Ya no están los agentes federales y de la Guardia Nacional que la custodiaban desde el primer éxodo masivo de migrantes en octubre de 2018. En Tapachula, el pasado 23 de marzo se registraron un motín y la fuga de migrantes, principalmente centroamericanos, que exigían su pronta repatriación, lo que no fue posible por el cierre de la frontera guatemalteca. En tanto, haitianos y cubanos exigían el oficio de salida del país o la regulación de su situación migratoria en la frontera sur. El 6 de abril más de 500 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron abandonados unos días por el INM en la línea fronteriza de México con Guatemala, luego de que el gobierno de ese país rechazó su ingreso. En consecuencia, ante los observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), agentes de la Guardia Nacional y del INM perdieron el control de un proceso de de-portación masiva que pretendían hacer por el paso fronterizo de Talismán, muni-cipio de Tuxtla Chico.

Entre la pandemia y la frontera cerrada

Yelitza Guadalupe Ruiz Villalta, encargada del albergue para migrantes Jesús El Buen Pastor, en Tapachula, señala que los 250 refugiados que están allí quedaron atrapados por las medidas oficiales contra la pandemia, aunque no están contagiados. Normalmente, dice Ruiz, se les ofrecen unas semanas de refugio, pero debido a la crisis sanitaria se les ha permitido quedarse mucho más tiempo, observando estrictamente las reglas preventivas. Cuando nuevos migrantes llegan a pedir refugio, pasan dos semanas en una sección de aislamiento para verificar que no desarrollen síntomas de coronavirus; después se les ubica en los grupos



correspondientes: mujeres, varones, madres con hijos o personas de la tercera edad.

La fundadora del albergue, Olga Sánchez, que en el sexenio de Vicente Fox fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, no entra a las instalaciones por precaución. En cambio, hace las gestiones necesarias para conseguir víveres. Ruiz Villalta, quien administra el lugar con su hija, señala que con la pandemia y tantos refugiados los víveres llegaron a agotarse, pero que todavía reciben apoyo de algunas instituciones y benefactores. Aun así, la situación es difícil. Todos los días llegan migrantes a tocar la puerta. Unos piden comida y se van, otros quieren un espacio donde pasar la noche, y se quedan días, semanas...

Cientos de guatemaltecos pasan cada día, por turnos y en grupos, a comprar abarrotes, enseres domésticos, medicamentos y todo lo que puedan llevar en las balsas. Un quetzal guatemalteco vale ahora más de tres pesos mexicanos y para los chapines es más redituable comprar aquí, pese a que deban pagar 10 quetzales por el paso en balsa. A la vista de agentes de la Guardia Nacional y del INM, casi todos ingresan a México con cubrebocas, pero pronto descubren que las medidas sanitarias mexicanas son más relajadas: mientras que en Suchiate nadie utiliza el accesorio, en el poblado fronterizo guatemalteco de Tecún Umán no traer cubrebocas es motivo de una multa de mil quetzales. El Ejército y la Policía Nacional Civil patrullan las calles y las carreteras de aquel país para hacer respetar las restricciones.

El éxodo que viene

Irineo Mujica, líder de la organización civil Pueblos sin Fronteras, señala que de ser “ciudades-cárcel” –como anteriormente calificó a las de la frontera sur, en particular a Tapachula– se convirtieron en “trampas de muerte” para los migrantes, por las aglomeraciones masivas que provocó el gobierno al liberarlos masivamente sin garantizar que todos fueran repatriados de forma segura y ordenada. Salva Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordóñez (que forma parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos), dice que de por sí los migrantes vivían en condiciones de discriminación y xenofobia, lo cual se agudizó con la pandemia porque ahora sufren malos tratos de la sociedad, de las instituciones migratorias y de las corporaciones policiacas y militares.

Añade Lacruz que el mensaje del gobierno mexicano de “quédate en casa” no tiene sentido para un migrante, que no tiene un lugar seguro donde aislarse. Además, en su condición, no pueden quedarse encerrados porque tienen que ganarse la vida. Por ese motivo, señala el activista, los defensores de los derechos humanos de los migrantes demandan al gobierno mexicano que las políticas públicas tomen en cuenta la diversidad de la población que está en el



país, principalmente en la frontera sur. Finalmente advierte que, si la pandemia causó fuertes daños económicos a México, a los países centroamericanos les irá peor, lo que puede causar otros flujos migratorios masivos desde Centroamérica una vez que pase la crisis sanitaria.

Los “héroes vivientes” exigen apoyo

(Verónica Espinosa y Gerardo Romo, pág.30 a 32)

Guanajuato/Zacatecas.— Desde Estados Unidos, organizaciones de mexicanos migrantes reprochan y le reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador que los llame “héroes vivientes” por el envío récord de remesas en el primer trimestre del año, mientras los ignora frente al ominoso escenario de crisis económica, el desempleo y el riesgo permanente de una deportación masiva por parte del gobierno de Donald Trump.

Una treintena de organizaciones de migrantes enviaron a fines de abril a López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard, a gobernadores y al Congreso federal, un manifiesto en el que se duelen de la “ruptura histórica” del Estado mexicano con esa comunidad, por la cancelación de varios programas fundamentales para ellos y sus familias en sus entidades de origen.

“Se requiere un cambio a fondo en todo el Estado mexicano, que reconozca nuestro aporte económico, financiero, social y cultural en el mantenimiento del país por más de 40 años —es una demanda central—; por ser mexicanos debemos formar parte integral en la elaboración y diseño de propuestas de apoyo a todos los sectores económicos y sociales, frente a los impactos de la doble crisis sanitaria y económica, tanto en nuestras comunidades de origen como de destino, desde una visión transnacional”.

Además de una lista de propuestas para reactivar programas cancelados e incrementar recursos a los consulados, las organizaciones de connacionales no omitieron expresar su desencanto por las expectativas no cumplidas en lo que va de la actual administración federal:

“No podemos seguir apoyando unilateralmente al país enviando masivamente remesas familiares y colectivas, cuando nuestras comunidades en Estados Unidos sufren los impactos sanitarios de la pandemia y los severos impactos económicos con nulo apoyo del gobierno de ese país, salvo algunas limitadas iniciativas a nivel local en no más de tres ciudades de Estados Unidos, y sin ninguna propuesta de política pública del gobierno mexicano para nuestras comunidades de origen y de destino”.



En su conferencia matutina del martes 5, el presidente agradeció “a nuestros paisanos migrantes” los más de 4 mil millones de dólares enviados a México, un récord en el primer trimestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de años anteriores.

“Se nos llama héroes, pero eso no se está reflejando ni en la comunicación, ni en el presupuesto, ni en apoyos a comunidades migrantes en México”, dijo en entrevista telefónica desde Los Ángeles el coordinador del Consejo de Federaciones Zacatecanas y enlace del colectivo de 31 organizaciones de mexicanos migrantes en Estados Unidos, Efraín Jiménez Muñoz.

“Ahorita hay ya un cansancio de la comunidad mexicana, de ver que en ya casi dos años del actual gobierno federal no se ven acciones, no vemos la coherencia entre lo que se dijo, se dice y lo que se está haciendo”, dice el líder zacatecano en conversación telefónica con Proceso.

“No hemos visto acciones concretas, ni siquiera exhortos a Trump para que no agrede tanto a los mexicanos. Los gobiernos anteriores no eran santos, pero se generaron poquitos logros a base de presión y luchas de las organizaciones. Ahora llegan y de un plumazo borran todo sin hacer una evaluación a fondo de los programas. Qué bonito que nos llamen héroes, ¿y luego?”.

Entre los programas cancelados están el de Inversión 3x1 para obras en comunidades; el Fondo de Apoyo Migrante y el Fondo para Fronteras.

La estrategia de AMLO “empuja al país al abismo”

(Juan Carlos Cruz Vargas, pág. 6 a 8)

A punto de la reapertura económica, la insistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de mantener un equilibrio fiscal, que implica renunciar a la contratación de deuda, pone freno a la recuperación de la actividad económica del país para 2021, sacrificando incluso su promesa de campaña de “primero los pobres”.

“Yo diría que insistir en un balance fiscal cero, en el equilibrio presupuestario, en momentos en que tenemos el choque adverso más extraordinario que ha sufrido el mundo, la globalización, la economía mexicana en décadas, es irresponsable. Es empujar al país al abismo y profundizar la recesión, es hacerla más prolongada y va a ir brutalmente contra los pobres. Es la medicina más incorrecta”, advierte en entrevista con Proceso Juan Carlos Moreno-Brid, investigador y profesor de economía en la UNAM.

El también exdirector adjunto y coordinador de Investigación de la sede en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) abunda: “La política fiscal del mundo entero está viendo cómo le hacen para poder gastar más,



de forma que haya dinero destinado a la salud, para salvar a los que están perdiendo el empleo y ayudar a los empresarios a no cerrar. Porque si llega el momento de descongelar esto, de que salgamos de nuestras casas, y no hay empresas, va a ser muy difícil que México crezca. El año pasado tuvimos una caída del PIB per cápita. Esta va a ser brutal, ahora va a ser de más del 10%. La promesa de Morena se diluye, se va al fondo del océano”.

AMLO, “icono neoliberal”

La política aplicada por López Obrador en una crisis sin precedente desde la Gran Depresión de los años treinta, va en sentido contrario, por donde se le mire, tanto en el fondo como en la forma.

En el fondo, por ejemplo, de acuerdo con un reporte de la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se encuentra el siguiente dilema: si se mantiene la política de austeridad, el saldo de la deuda pública podría incrementarse 15% real respecto a 2019, alcanzando niveles históricos como porcentaje del PIB, llegando a 103 mil 549 pesos por persona. Esto es sólo por la caída de los ingresos presupuestarios y el efecto de la depreciación del peso.

Mientras que aplicando una política fiscal contracíclica, mediante un aumento del gasto público en 2.6% del PIB, el saldo de la deuda tendría un crecimiento real de 21%, llegando a 108 mil 653 pesos por persona.

Según el estudio elaborado por Carlos Vázquez Vidal, investigador del CIEP, la deuda, que por definición es resultado de la política de gastos y de ingresos del sector público, es una opción de financiamiento que presenta un costo de 5 mil pesos por persona para un incremento de 2.6% del gasto público.

“Tomando en cuenta que si estos recursos son destinados para estimular la demanda agregada y, por ende, el crecimiento económico, el nivel de endeudamiento será compensado con mayores ingresos presupuestarios en el futuro. Por el contrario, aun sin aumentar el gasto, la deuda se incrementa debido a mayores requerimientos financieros para compensar el faltante de ingresos, sin que esta deuda ayude a salir de la crisis sanitaria y económica que, a medida que se prolonga, profundiza los problemas estructurales del país”, concluye el reporte del CIEP.